

El euro a examen. Los interrogantes de la unificación monetaria

Laureano Villasana Lapalma
Historiador

SUMARIO: 1. DESCOORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS FISCAL Y PRESUPUESTARIA CON RESPECTO A LA MONETARIA.—2. EL PACTO DE ESTABILIDAD.—3. POLÍTICA MONETARIA Y HETEROGENEIDAD DE LOS NIVELES NACIONALES DE DESARROLLO.—4. LA SUPERACIÓN DE LA COYUNTURA ECONÓMICA.—5. DESCOORDINACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS COMUNITARIAS Y LAS NACIONALES.—6. EL *TRESCOMAPORCIENTISMO* MASTRIQUIANO.—7. LA PENURIA DEMOCRÁTICA.—8. AMPLIACIÓN Y EURO.—9. CONCLUSIONES.

Mil novecientos noventa y ocho es, sin lugar a dudas, el año del euro, doce meses claves en los que se habrá de elucidar la cuestión de la Unión Económica y Monetaria (UEM) hacia la que se encaminan con paso firme los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Aunque esta unidad monetaria planea sobre el europeísmo desde, al menos, la aprobación del Tratado de Roma en 1957, no comenzó a ser intensamente debatida sino a partir de 1989, momento en el que las distintas administraciones vinculadas con la Comunidad se pusieron a trabajar seriamente al respecto, hasta finalizar dicho proceso previo con la adopción del Tratado de la Unión Europea (TUE) en Maastricht, Países Bajos, en 1992. Con todo, y a pesar de las consecuencias que tendrá para la ciudadanía europea y mundial, su contenido no ha sido objeto de polémica pública sino a partir de 1996, y siempre dentro de cauces muy especializados.

Razones pueden identificarse diversas pero, por una parte, la complejidad técnica tanto del proceso como de las disposiciones consensuadas y recogidas por el TUE y de su puesta en práctica, como, por otra, la fe eu-

ropeísta que profesaba hasta bien recientemente un alto porcentaje del electorado europeo, constituyen sin duda una explicación suficiente para que la UEM no haya sido sometida a un necesario debate de fondo.

Sin embargo, no es difícil imaginar en los maduros electores europeos una cierta ansia de comprender desde una perspectiva nacional —y las campañas que preceden a los comicios en los distintos Estados europeos ofrecen, como comprobamos en cada oportunidad, la última en Francia entre mayo y junio de 1997— qué es lo que realmente se ventila, ventajas e inconvenientes, con esta opción que plantean sus dirigentes, sobre todo teniendo en cuenta esa complejidad técnica que la distingue.

Habría que comenzar enmarcando la cuestión. Con la moneda única, la Unión Europea (UE) pretende, fundamentalmente, crear empleo, mejorar la competitividad frente al exterior y salvaguardar el Estado del Bienestar. Para conseguir dichos objetivos, los Quince se han puesto de acuerdo sobre, fundamentalmente, tres criterios de convergencia que cada uno de ellos tiene que cumplir el 1 de enero de 1998 (pendiente de examen ulterior, previsto para los primeros días de mayo de ese mismo año) para poder participar en el proyecto de unificación monetaria a partir del 1 de enero de 1999: un déficit público inferior al 3 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB), una inflación limitada a un máximo del 3 por 100 y una deuda pública que no supere el 60 por 100 del PIB. Además, se comprometen a mantener estables el precio del dinero y el tipo de cambio.

Pero la pregunta surge irremediablemente: ¿es esto realizable? Para poder contestar debemos disponer de todos los elementos de juicio. Hace dos años llegó a su término la llamada Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). De entre sus resultados sobresale con luz propia un compromiso para establecer una hasta ahora inusitada liberalización del comercio a escala planetaria. De este modo, Estados y agrupaciones interestatales con estructuras arancelarias comunes, tengan o no vocación supranacional, se verán obligados a levantar una buena parte de las trabas fronterizas a la importación de productos. Es decir, estamos ante el fenómeno que, simplificando mucho, ha sido bautizado como mundialización o globalización de la economía.

Hasta entonces, y sin temor a exagerar, puede decirse que las defensas comerciales de carácter arancelario que ha desarrollado a lo largo del tiempo la UE se encuentran no sólo entre las más altas del mundo, sino que su concepción obedece a toda una filosofía que justificaría la protección de los elevados precios interiores de cualquier tipo de productos, pero especialmente de aquellos de origen agrícola, con respecto a los procedentes de otros mercados. En este sentido, puede afirmarse que la Ronda Uruguay constituyó una valiente apuesta de la UE por la competitividad planetaria.

Ahora bien, además de la elevada protección arancelaria, la razón de que en la Europa comunitaria los precios de mercado sean tan altos hay que achacárselo a ese complejo sistema público de amparo social al individuo que se ha venido en denominar *el Estado del Bienestar*. Efectivamente,

para el productor es obligatorio repercutir en los precios de venta al por mayor el coste social —pensiones, sanidad, cobertura de desempleo— que a él como empresario le supone tener un número determinado de empleados. Más tarde, y por su parte, estará obligado a ingresar el valor de esas prestaciones en las arcas del Estado de forma que éste, por su lado, pueda ofrecer a los trabajadores esa protección a la que, en la mayoría de los casos, está constitucionalmente comprometido.

De más está decir que a toda la complicada red de beneficios sociales de que disfrutamos hoy los europeos occidentales, a su progresiva ampliación desde aproximadamente el final de la II Guerra Mundial hasta la fecha, obedecen los elevadísimos déficits públicos que padecemos al ser cada vez mayor la diferencia entre lo que ingresa el Estado (impuestos fundamentalmente) y lo que gasta para el sostenimiento de esas conquistas sociales. Por su parte, los empresarios europeos, obligados a reflejar la parte de esas cargas que les corresponden en los precios finales de sus productos, padecen una consiguiente pérdida de competitividad frente a otros idénticos elaborados en ámbitos nacionales menos propensos a la protección social.

En esos ámbitos se da otro tipo de países, compitiendo por el mismo mercado mundial que, por lo general, sostienen un concepto profundamente diferente respecto de lo que, desde nuestra perspectiva, ha de ser la protección social del individuo. Son las famosas economías emergentes, un grupo de naciones, fundamentalmente del Extremo Oriente, del Sureste asiático, pero también de otras zonas de la geografía terrestre, comercialmente agresivas.

Así pues, pudiera decirse que ante una liberalización del comercio internacional cada día más cercana y progresivamente más intensa, estos países parten en situación de neta ventaja, al estar la mayor parte de sus trabajadores —destajistas básicamente— socialmente desprotegidos en la práctica por sus Estados, con la consiguiente repercusión en una mayor competitividad de sus productos. Pero no son los únicos, aunque en el caso, por ejemplo, de los norteamericanos, si bien su protección social es netamente superior en calidad y cantidad a la de los habitantes de esas zonas emergentes, también es claramente inferior con respecto a la de los países que componen la Europa comunitaria.

Es evidente que ningún gobierno de un Estado de la Europa occidental, ningún partido político con vocación de poder asumirá un programa que contemple un recorte sustancial del Estado del Bienestar con el objetivo de ganar en competitividad frente al exterior y poder hacer frente con alguna garantía de éxito al envite que supone la liberalización mundial del comercio. Ya se sabe que, por definición, cualquier medida política que tienda a la reducción del déficit presupuestario es impopular y puede costarle a no importa qué tipo de gobierno unas eventuales próximas elecciones. De tal manera que el único modo de adaptarse a la nueva situación mundial es poniendo en marcha algo que realmente sea capaz de concitar

la ilusión de un muy alto porcentaje de electores europeos: la unificación monetaria dentro de los quince Estados que componen la Unión Europea, o, lo que es lo mismo, plantear a esos electores la alta probabilidad de alcanzar en un período relativamente breve de tiempo uno de los sueños del europeísmo desde que Jean Monnet sentara sus cimientos sobre las cenizas todavía calientes de la II Guerra Mundial.

Desde esta perspectiva, pues, resulta evidente que el objetivo de la moneda única no sería otro que blindar monetariamente a los Quince para resistir la embestida de la nueva etapa de globalización de la economía mundial que se abre ante nuestros ojos. De tal modo que, como ha señalado Robert J. SAMUELSON, el euro aparecería como «una versión económica de la Línea Maginot» (*International Herald Tribune*, 9-I-1997), es decir, una defensa aparentemente inexpugnable. ¿Cómo funciona el mecanismo?

El proyecto, tal como ha sido presentado, tiene tres grandes ventajas. Por un lado, exige de los Estados participantes una ligera reducción, y su control posterior, de magnitudes trascendentales para la salud financiera nacional como el déficit, la inflación y la deuda pública; es decir, un esfuerzo llevadero para las respectivas poblaciones y que no tiene por qué costar el cargo a ningún dirigente. Por otro, salvaguardaría, en sus grandes líneas, la actual estructura de protección social, los beneficios sociales del Estado del Bienestar. Pero, finalmente, y mucho más importante, dotaría teóricamente a la Unión, caso de salir adelante, de una potencia financiera descomunal al convertir a su divisa, el euro, en moneda de transacción mundial, junto con el dólar norteamericano.

Por el contrario, de acuerdo con el planteamiento filosófico que anida en Maastricht, si la Europa de los Quince no pudiera culminar el proyecto de una moneda única, las pujantes economías asiáticas se lanzarían, en el marco de la liberalización mundial de los intercambios, a una especie de asalto comercial final contra este espacio europeo —que de hecho es, con diferencia, junto a Estados Unidos y Japón, el más rico del planeta— al desaparecer una buena parte de su protección arancelaria.

Sin embargo, coincidiendo en lo básico con las bondades que a primera vista ofrece ese planteamiento teórico, parece que se ha actuado con demasiada celeridad, algo que continúa sin ser aclarado. Pero no es el único interrogante sin desvelar. Se puede plantear, además, una amplia serie de cuestiones, algunas de las cuales se exponen a continuación.

1. DESCOORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS FISCAL Y PRESUPUESTARIA CON RESPECTO A LA MONETARIA

El sistema unificador ideado por Maastricht tiene su base en la creación de una autoridad monetaria central, con sede en Frankfurt, y con capacidad para elaborar y determinar autónomamente la política monetaria

de la Unión. Sin embargo, paralelamente a la acción monetaria de este superbanco central, cada uno de los gobiernos nacionales seguirá diseñando autónomamente sus propias políticas fiscales y presupuestarias. En los momentos actuales serían quince políticas fiscales y presupuestarias, pero, en un futuro próximo, 18 ó 21, incluso 27, cuando se complete la geografía europea de la ampliación.

Esta coexistencia, por definición precaria, será difícilmente capaz de garantizar la estabilidad cambiaria del euro. Aunque se aduzca que en los distintos niveles de contacto en el ámbito comunitario se coordinará la acción económica a desarrollar, no será difícil forjarse un escenario en el que uno o varios gobiernos de la UE, una vez que circule la nueva moneda, desarrollen, por razones internas de índole nacional, e incluso electorales o, mejor dicho, sobre todo electorales, políticas fiscales y/o presupuestarias opuestas a la ortodoxia con que, de seguro, querrá actuar Frankfurt.

Por otra parte, y no menos paradójicamente, como ha subrayado el Nobel de Economía Gary BECKER, cuando el mundo camina hacia una rápida descentralización en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles —una de las principales características de la globalización—, los comunitarios optamos por concentrar poder en la institución bancaria de Frankfurt y, por ende, en Bruselas, desechando la libre y sana competencia entre las divisas, descalificando implícitamente ese no menos saludable principio de subsidiariedad, recogido por el propio TUE, mediante el que, como se sabe, se prima el buen funcionamiento de las instancias inferiores frente a las superiores.

Y lo curioso es que se dan casos chocantes como el de la ya muy centralizada economía francesa, que, a pesar de una opinión pública combativamente contraria, optó en referéndum (1993) por Maastricht, por el euro —decisión ésta, recuérdese, en la que el presidente Mitterrand apostó todo su prestigio político—, esto es, por una mayor centralización en una entidad superior. Su principal razón: defenderse de las devaluaciones, que tachan y acusan de competitivas, de sus socios comunitarios, básicamente del sur, como ocurrió en 1992-93 con las de la lira italiana, el escudo portugués y la peseta española, pero también con la de la libra esterlina.

En cierto modo, y sin que sea reconocido públicamente, se pretende copiar el modelo estadounidense de la Reserva Federal, pero se hace sin unificar las políticas económicas, fiscales y presupuestarias y, sobre todo, sin que exista aún un único y verdadero mercado de trabajo, liquidando las trabas administrativas persistentes, dotándolo de la consiguiente libertad de circulación de los trabajadores. Esto es, una de las cuatro libertades previstas por el Acta Única Europea —de bienes, de capitales, de servicios y de trabajo— aún no puestas totalmente en práctica en el ámbito comunitario y que cada vez será más difícil de conseguir, dados los obstáculos nacionales y las cifras de desempleo actuales. Como nos recordaba recientemente el profesor Luis DE SEBASTIÁN, «apoyándose en las opiniones de

Meade y Tibor Scitovsky, Robert A. Mundell definía el área monetaria óptima como una región dentro de la cual existiera plena movilidad laboral» (*El País*, 16-VII-1997). No hace falta añadir, para subrayar la contradicción, que en Estados Unidos la masa laboral, el individuo, se traslada con libertad absoluta de un Estado a otro sin ningún tipo de cortapisa administrativa ni de otro tipo.

2. EL PACTO DE ESTABILIDAD

Para solucionar, en parte, el problema planteado por la autonomía fiscal y presupuestaria que mantendrán los gobiernos nacionales y, sobre todo, para evitar que los países económicamente más potentes —léase Alemania— se vean obligados a pagar las alegrías presupuestarias de los más débiles, los Quince se pusieron recientemente de acuerdo (Consejo Europeo de Amsterdam, 16-17 de junio de 1997) sobre un llamado pacto de estabilidad —no recogido en el articulado de Maastricht— que supondrá la aplicación automática de elevadísimas sanciones a todos aquellos países que superen la barrera del 3 por 100 de déficit sobre el PIB: por cada décima porcentual por encima de ese 3 por 100, se aplicará al país infractor una multa de un 0,25 por 100 sobre la cifra total de su PIB. Además, se restringe el acceso del país infractor a los fondos estructurales. Esto es, un sistema punitivo que, a la postre, no incidirá más que en un agravamiento del déficit público.

Así, si un Estado un buen año, por la razón que fuere, alcanzara un déficit del 3,5 por 100, por poner una cifra moderada, a ella habrá que agregar la multa correspondiente (1,25 por 100 del PIB)*, con lo que en la práctica tendría que redoblar el esfuerzo para tratar de regresar al 3 por 100 mastriquiiano. Pero, además, si las multas fueran aplicadas rigurosamente, los países con economías más débiles se verán impedidos, según Michael R. SESIT, a elevar el gasto público para combatir el desempleo que se generaría (*Cinco Días*, 17-VI-1997). Tampoco podrán disminuir la presión impositiva, más bien al contrario, puesto que habrá que financiar déficit y multa al mismo tiempo.

En cuanto a las razones para que un Estado se vea compelido a aumentar el déficit, puede haber muchas. Se está hablando de una depresión profunda de la economía nacional o de la comunitaria, de una crisis como la japonesa actual en la que el Estado tendrá que sacar a flote con dinero público a las entidades financieras en dificultades, pero también, y pongámonos en la peor de las eventualidades, algo de lo que claramente no escapen más que unos pocos de los actuales quince miembros: un riesgo inminente de guerra ante las amenazas de un tercero. Lógicamente, y ante esa

* En el caso de España, con un PIB de unos 80 billones de pesetas, la multa se elevaría a un billón de pesetas.

resitura, al menos así ha sido sin excepciones a lo largo de la historia, el Estado concernido tenderá a armarse o a rearmarse, a aumentar exponencialmente su presupuesto dedicado a defensa y, por supuesto, a superar inevitablemente la cifra del 3 por 100 de déficit. Y la pregunta surge automáticamente: ¿estará el resto de los Estados dispuesto a sufragar, en la parte que le corresponda, el esfuerzo de guerra de uno de sus socios comunitarios en el más puro marco de sus intereses nacionales?

No está ni mucho menos claro y, desde luego, nadie puede hacerse ilusiones respecto a la solidaridad que debería recibir el país amenazado de guerra más allá de las palabras, los gestos y las fotografías del resto de las naciones comunitarias. Las opiniones públicas de estas potencias no consentirán que sus gobiernos se involucren en acciones muy costosas, sobre todo desde el punto de vista de las vidas humanas en juego, en las que no reconozcan intereses nacionales propios que merezcan el esfuerzo de entrar en combate. Recuérdese el caso de la guerra de las Malvinas (1982), en la que un Estado comunitario, el Reino Unido, recibió por parte de los demás Estados miembros una sonora división de opiniones. Sorprendentemente —para los euroentusiastas—, la principal ayuda la obtuvieron los británicos de un país extracontinental: Estados Unidos.

En este sentido, no es difícil reflexionar sobre la posibilidad de una apertura de hostilidades en el latente conflicto grecoturco. No se puede estar muy de acuerdo, por tanto, con Karl Lamers, portavoz de política exterior del grupo parlamentario CDU-CSU en el *Bundestag*, que, en una entrevista para la revista *Politique Internationale* (n.º 75, primavera de 1997), destacaba, un tanto ingenuamente, que «no se puede suponer que dos o tres miembros de una unión monetaria compuesta de diez o doce miembros entren en guerra con un tercero mientras el resto permanece en sus hogares». Sería mejor no hacer la prueba.

3. POLÍTICA MONETARIA Y HETEROGENEIDAD DE LOS NIVELES NACIONALES DE DESARROLLO

Salta a la vista, por otra parte, que aunque los quince países miembros de la Unión disfruten de niveles de desarrollo elevados con respecto al conjunto del planeta, perviven entre ellos diferencias considerables, particularmente en cuanto a la renta *per capita* se refiere. Es preciso tener claro, sin embargo, que con Maastricht los gobiernos de los Estados pierden el control sobre la política monetaria cediéndoselo a una institución central; con ello, estarán haciendo dejación voluntaria de un utensilio fundamental para crear desarrollo desde una perspectiva nacional.

Hasta ahora, los gobiernos han utilizado el tipo de cambio de sus divisas —devaluando o revaluando— como instrumento de ajuste para crear mejores condiciones de mercado de acuerdo con la coyuntura del momento. Por ejemplo, devaluando se frenan las importaciones, se fomentan

las exportaciones y el turismo y, por ende, se crea empleo. Es cierto que no se trata de un procedimiento muy ortodoxo, pero sí que ha funcionado en momentos cruciales, dulcificando en España políticas de ajuste draconianas y ayudando a reequilibrar nuestra balanza de pagos: 1959, 1974, 1992-93.

Cuando el euro sea la moneda común ya no podrá utilizarse, evidentemente, esta herramienta y los países menos dinámicos, con altas tasas de desempleo, lo tendrán más crudo, si cabe, para reducir el diferencial con respecto a los más favorecidos y únicamente podrán reajustarse vía el incremento del ya elevado paro. Desde la perspectiva alemana u holandesa es fácil prescindir de éste y de los utensilios mencionados en el párrafo anterior, ya que su nivel de riqueza no los precisa, lo que no ocurre, por el contrario, con países que, como España, andan a la abismal distancia de 7.000-10.000 dólares con relación a su renta *per capita*.

Se suele aducir por los defensores de acelerar la unificación monetaria de la UE que la falta de esa herramienta básica para crear desarrollo que es la política monetaria se compensará con los flujos de ayuda vía los diferentes fondos existentes. No nos engañemos. La Comisión lanzó no ha mucho un globo sonda relativo a los fondos de cohesión que nos puede permitir ver por dónde va a evolucionar esta cuestión. Según la información difundida por esa instancia comunitaria, los países que accedan al euro en la primera fase perderán automáticamente esa entrada de capital que estableció el Consejo en 1992. Mucho peor es aún la corriente generalizada de opinión —todo el arco parlamentario— que se está creando en Alemania respecto a estas ayudas y que ha centrado en España el blanco de sus ataques.

El hecho de que, ante las reacciones producidas, la Comisión corriera velozmente no debe llevar a nadie a hacerse ilusiones al respecto, particularmente porque una vez que accedan a la UE los países candidatos de Europa central y oriental, con economías mucho menos desarrolladas que la nuestra, mucho menos desarrolladas que la de Grecia, mucho más faltas de ayuda, habrá que cederles, natural y lógicamente, la parte del león de esos fondos, así como de los estructurales, de los amparados por la Política Agraria Común (PAC), etc. No es preciso añadir que, de este modo, será extremadamente difícil reducir la distancia que separa a los países menos ricos de los poderosos dentro de la Unión. El modelo que nos ofrece en Alemania la fusión de dos monedas, el *Deutsche Mark* (RFA) y el *Ost Mark* (RDA), tras el desplome del Muro de Berlín, nos puede servir de orientación sobre los efectos que produce un proceso similar al del euro cuando se integran monetariamente economías con niveles de desarrollo sumamente diferentes.

4. LA SUPERACIÓN DE LA COYUNTURA ECONÓMICA

Como corolario de los dos puntos anteriores pareciera, por tanto, que Maastricht pretendiera, ignorándola, haber acabado definitivamente con la coyuntura económica, con las alzas y bajas tradicionales de las variables macroeconómicas, con las épocas de recesión o depresión y con las de expansión. No es concebible. Tratar de convencer respecto a una supuesta inmutabilidad de estas variables no es asumible. Por lo demás, y en un mundo cada vez más interdependiente, progresivamente más globalizado, en el que unos y otros dependeremos ineluctablemente de las variaciones en los niveles de intercambio de los distintos mercados internacionales pero, fundamentalmente, en nuestro caso europeo, del norteamericano, así como de los del Extremo Oriente y Sureste asiático, será misión poco menos que imposible.

En estas condiciones, son lógicas reacciones de pánico contenido, o al menos de nerviosismo, por parte de los responsables de las economías europeas candidatas al euro ante, por ejemplo, un alza sostenida en los mercados de cambio de la divisa norteamericana, a través de la cual tiene lugar, diariamente, un importante porcentaje de transacciones internacionales: una elevación inesperada y brutal del valor de cambio del dólar puede dar al traste con los siempre penosos esfuerzos por controlar la inflación. Son imponderables que ninguna economía nacional esté en situación de anticipar ni siquiera a corto plazo, y mucho menos en unas condiciones en las que, como las actuales, cada día se negocian en los mercados de cambio mundiales verdaderas masas de dinero: se calcula que esa cifra supera diariamente los 185 billones de pesetas.

El muy europeísta gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude TRICHET, ponía el ejemplo de un país de la zona euro en el que los costes de producción crecieran un 2 por 100 anual por encima de la media; al cabo de tres años habría perdido un 6 por 100 de competitividad sin que disponga, ya entonces, del recurso a una devaluación de la moneda para tratar de corregir el desfase. Y añadía: «En este caso, la crítica de ciertos universitarios según la cual la zona euro no sería una zona óptima sería fundada» (*Politique Internationale*, n.º 75, primavera de 1997). Salta a la vista que todos los países que tomen parte en el euro lo harán con voluntad de respetar los criterios de convergencia, no sólo en el momento del «examen», sino en los meses y años venideros. Pero ¿quién puede asegurarnos que en el futuro no se darán cambios bruscos en las respectivas coyunturas nacionales? Quien habla de los costes de producción puede hacerlo de cualquier otra macromagnitud. Es completamente imposible mantener intemporalmente los criterios por debajo de su límite mastriquiiano, fijado, no se olvide, en un momento muy concreto: 1992.

Por otra parte, la inmensa mayoría de los Quince está poniendo en práctica mecanismos de lo que se ha venido en bautizar como ingeniería contable y que consiste en utilizar al máximo los instrumentos que ofrece

la contabilidad con objeto de poder alcanzar los criterios de convergencia en el momento señalado para su examen, la primavera de 1998. Y así, con independencia de que sea más o menos necesario, los Estados han acelerado la privatización de las empresas de su propiedad (principalmente, electricidad, telefonía, acerías, etc.) para con los ingresos obtenidos enjugar el déficit y la deuda pública. Del mismo modo, algunos han transferido a la Seguridad Social general los fondos de pensiones de empresas estatales saneadas (por ejemplo, France Télécom) o han propuesto la revalorización de sus reservas en oro o la ralentización del traslado de la capital a Berlín (Alemania).

De esta manera, los gobiernos evitan tomar las muy impopulares medidas de reducción del Estado del Bienestar, únicas capaces de disminuir estructuralmente, y no coyunturalmente, el déficit, aunque, eso sí, con un coste electoral francamente elevado y por tanto difícil de asumir. Claro que llegará un momento en el que las privatizaciones y el maquillaje de los libros ya no serán posibles porque se hayan convertido en un procedimiento agotado y, entonces, ¿qué hacer? Deuda y déficit treparán por encima de sus límites y tendrá que entrar en funcionamiento el pacto de estabilidad, no en uno o dos países, sino en el conjunto de la Unión, y ello con todas sus consecuencias.

5. DESCOORDINACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS COMUNITARIAS Y LAS NACIONALES

La mayor parte de los especialistas no convencidos, particularmente los provenientes de sectores de la izquierda, cree, no sin cierta razón, que una de las causas, tal vez la más importante, de las elevadas tasas de paro que sufrimos un nada desdeñable número de países comunitarios se debe al rigor monetario que están aplicando los respectivos bancos centrales, con la consiguiente generación de condiciones de deflación competitiva, como elemento fundamental de la estrategia que precede a la aproximación a la unificación monetaria. Es cierto, con todo, que, de acuerdo con determinado modo de actuar, el manejo libre por parte de los gobiernos de la variable del déficit público podría mejorar sustancialmente las cifras de desempleo.

Sin embargo, y con ser un factor coadyuvante, la principal razón de las actuales elevadas cifras de paro no viene de un modo exclusivo de las prácticas monetaristas, sino de la aparente contradicción en que han entrado las políticas económicas de los Estados desde la puesta en marcha del proceso de unificación monetaria. A nadie puede escapársele ya que este proceso, desde la perspectiva gubernamental de los países europeos, viene determinado por la liberalización del comercio mundial impuesta por la Ronda Uruguay del GATT, por la OMC y por la globalización general en que desde hace casi dos décadas está inmerso nuestro planeta.

Así que, por un lado y a nivel comunitario, se camina, por tanto, hacia

ese mítico euro sobre una base monetarista, liberal, tanto conceptualmente como empujados por las condiciones vigentes a nuestro alrededor. Por el contrario, y en el plano interno de los Estados, se mantienen criterios económicos o sociales de inspiración keynesiana del género de la compleja estructura de protección social, los elevados impuestos sobre el trabajo, así como sobre los beneficios empresariales (medida ésta sobre la que se apoyan las decisiones tomadas en julio pasado por el gobierno Jospin de Francia para reducir el déficit público), una regulación excesiva de los mercados laborales, la pervivencia de los convenios colectivos como eje de la relación entre trabajadores y empresas, que impide a éstas ajustarse con flexibilidad a las condiciones del mercado, entre otros de los más destacados.

6. EL TRESCOMAPORCIENTISMO MASTRIQUIANO

En una cuestión controvertida como es la de la unificación monetaria existe, a pesar de todo, una coincidencia general: el proyecto no podrá salir adelante si al menos dos de los grandes países no participan. Y, señaladamente, Alemania y Francia, en el entendido, por supuesto, de que los criterios fijados en el TUE sean respetados escrupulosamente de acuerdo con la «doctrina alemana» difundida a los cuatro vientos por el ministro de Finanzas de la RFA, Theo Waigel («un 3,0 por 100, y ni una décima más» o «tres es tres y así es como permanecerá»), y por el presidente del *Bundesbank*, Hans Tietmayer. No obstante, aunque ambas naciones probablemente cumplirán las exigencias de inflación y deuda (con reservas en cuanto a la deuda de Alemania), tratar de dejar sus respectivos déficits públicos en el 3 por 100 (tres coma cero por ciento) hasta el 1 de enero de 1998 se ha mostrado como una especie de martirio contable.

En Francia, las huelgas de sus ferroviarios en diciembre de 1995 han demostrado que estamos ante una misión, como poco, complicada. También lo ha hecho el adelanto de elecciones legislativas la pasada primavera para tratar de conseguir una mayoría RPR-UDF que permitiera aplicar las draconianas medidas precisas para encarrilar la economía hacia Maastricht, de acuerdo con Pierre-Antoine DELHOMMAIS y Henri DE BRESSON (*Le Monde*, 3-VII-1997). No debe olvidarse que, en el momento de convocar esos comicios, únicamente le quedaba un año de vida a la legislatura entonces vigente y con toda seguridad la impopularidad de las decisiones a tomar para cumplir los famosos criterios no habría permitido, en ningún caso, la reelección de la mayoría RPR-UDF en la primavera de 1998, momento en que correspondía celebrarlas.

El cálculo de Chirac-Juppé adelantando fue correcto. No lo fue tanto el momento escogido. Como se vio a las pocas semanas de tomar posesión Lionel Jospin, no sólo las alegrías presupuestarias prometidas durante su campaña son imposibles de aplicar en el marco de la moneda única, sino

que, además, ha debido aumentar los impuestos a las empresas y sobre los beneficios empresariales y reducir en 10.000 millones de francos (unos 250.000 millones de pesetas) los gastos ya presupuestados para 1997. Todo ello para dejar un déficit público estimado en el 3,6 por 100 para 1997 en un optimista 3,2 por 100, dos décimas por encima del fijado en el TUE. No hace falta decir que, en un país tan fácilmente movilizable como Francia, la carrera hacia la moneda única puede llegar a enfrentar gravemente entre sí a los políticos y a la población, así como a ésta con el proyecto europeo.

De ponerse en práctica la doctrina alemana del *trescomaporcientismo* («ni un decimal a la derecha de las cifras fijadas»), inevitablemente surgirán dos zonas monetarias, una alrededor del euro, la otra formada por los países que mantengan, por obligación o voluntad, sus respectivas divisas nacionales. (En los momentos actuales, según la Comisión Europea, Grecia e Italia —aunque es inconcebible que ésta no participe— y, por voluntad propia, el Reino Unido, Suecia y, posiblemente, Dinamarca). Las relaciones entre ambas zonas no han sido estudiadas con el suficiente detenimiento, pero desde ahora puede asegurarse que, a medio plazo, será duro impedir la división política en que podría degenerar la falta de entendimiento en el ámbito monetario.

7. LA PENURIA DEMOCRÁTICA

Hasta bien recientemente, la política monetaria era un instrumento en manos de los gobiernos nacionales que, en todos los casos, y decir esto es una obviedad, surgen de la voluntad popular expresada a través de elecciones perfectamente democráticas. Así, los pueblos otorgan una amplia confianza a los elegidos en base a un programa y durante un período de tiempo predeterminado. Esta confianza incluye la de establecer la política monetaria del país.

Con todo, el proceso de Maastricht ha obligado a los Estados a independizar la política monetaria aprobando normativas legales que hacen depender su determinación de los estamentos directivos de los respectivos bancos centrales encabezados por su gobernador, nombrado por el Ejecutivo. Salta a la luz que estamos en presencia de un cargo cuyo nombramiento no sólo tiene un claro origen democrático, sino que, además, está sometido al permanente control parlamentario, esto es, de la soberanía popular. Cuesta creer que los mismos criterios de supervisión pervivan cuando dicha política sea competencia exclusiva del futuro equipo directivo del Banco Central Europeo.

Por otro lado, la fijación de cualquier tipo de política monetaria por parte de ese Banco comunitario implicará una limitación no legal pero sí factual de las políticas fiscal y presupuestaria de cada uno de los gobiernos de los Estados miembros, electos directamente por la población. Parece,

por tanto, que se conculca con ello ese principio básico de toda política económica en un sistema democrático según el cual no hay impuestos sin representación (*no taxes without representation*).

Nuevamente, el caso francés sirve para ilustrar el divorcio no declarado entre opinión pública-voluntad electoral, de un lado, y proyecto europeo sustentado por el TUE, del otro. Las elecciones de mayo-junio de 1997 las ganaron unos partidos con programas que, en distinta medida —los socialistas menos, los comunistas y verdes más—, se revelaban fundamentalmente antimaastriquianos: estimulación de la demanda pública, freno a las privatizaciones de empresas públicas, creación de puestos de trabajo en el sector público, elevación del salario mínimo. Es decir, decisiones que, de ser puestas en marcha, no sólo agravarían el ya grave déficit público de nuestro vecino ultrapirenaico, sino que, además, obligarían a un mayor endeudamiento.

Con todo, una vez constituido el nuevo gobierno de coalición entre las fuerzas políticas mencionadas, su flamante primer ministro anuncia la rápida puesta en marcha de las promesas realizadas, pero también que ha encargado al Tribunal de Cuentas una auditoría de los números del Estado para saber la situación exacta del déficit público. Conocido (el 21 de julio de 1997) que éste se encuentra entre el 3,5 y el 3,7 por 100, lejos, muy lejos de Maastricht, dicho gobierno opta, entre la aplicación de las medidas sociales prometidas, que indudablemente lo incrementarían, y el cumplimiento de los criterios del TUE, entre satisfacer a su electorado y mantener el ritmo de Maastricht, por seguir esta última senda.

Se decide a restringir así algunas partidas del gasto público y a aumentar determinados impuestos, básicamente los que afectan a las empresas y a sus beneficios —clausurando o dificultando de este modo la posibilidad de crear empleo por parte del sector privado, así como del público—, declarando que las promesas realizadas no podrán aplicarse antes de finales de 1998. Es decir, hacer la política del anterior Primer Ministro, el gaullista Alain Juppé, fuertemente castigada por las urnas, pero sin Alain Juppé, como ha subrayado ingeniosamente Jean D'ORMESSON (*ABC*, 3-VI-1997). De hecho, Jospin lleva camino de caer en el mismo error que Chirac cuando, tras ganar hace dos años las presidenciales, no cumplió después, Juppé mediante, las promesas de su campaña electoral.

Pero, al mismo tiempo, se acalla que los sacrificios que exige actualmente la opción por la moneda única, lejos de finalizar en este y en años sucesivos, se perpetuarán en el tiempo merced al pacto de estabilidad y en el marco de un Estado del Bienestar que ningún responsable político pretende, al menos públicamente, que haya que superar. Dicho de otro modo, en economía hay siempre distintas formas de enfocar las consecuencias de las medidas tomadas: al reducir las ganancias de las diferentes firmas, productivas o de servicios, se frena la posibilidad de que el sector privado, y también el público, sean capaces de impulsar la creación de puestos de trabajo.

Sería, por tanto, perfectamente legítimo que, a medio plazo, la mayoría de votantes franceses que ha dado su confianza a la coalición formada por socialistas, comunistas y verdes se sienta defraudada. Con ser ésta una consecuencia muy seria de la política emprendida, no es la peor, ya que en ese contexto no hay que olvidar que, entre bastidores del escenario político, acecha el Frente Nacional (FN), el partido neofascista de Jean-Marie Le Pen, que continúa creciendo y ya es, en número de votos, aunque no de escaños, el tercer partido de Francia, después del Partido Socialista y del RPR gaullista. En estas condiciones, sería lógico que los electores se planteen un voto radical en unos próximos comicios o, incluso, se formulen a sí mismos la cuestión clave: entonces, «¿por qué votar?», pregunta que realiza Joaquín ESTEFANÍA MOREIRA tras analizar en esta misma onda el proceso electoral británico (*El País*, 4-V-1997).

Está resultando, a lo que parece, que los acuerdos intracomunitarios, básicamente negociados por funcionarios, no pueden ser inspirados, ni tan siquiera doblegados o corregidos, por la voluntad de una mayoría electoral, contrariamente a lo que este mismo pueblo, y la Constitución que lo ampara, ha creído hasta ahora. Es una idea de raíz autoritaria que, como ha subrayado Álvaro DELGADO GAL, «presupone que los técnicos y los políticos saben mucho más que los votantes y que en los trances apretados vale más no tomarse la democracia demasiado a pecho» (*ABC*, 11-VI-1997). Así pues, en estas condiciones, ¿qué posibilidad tendrán los electorados de escoger una metodología económica determinada para crear prosperidad, riqueza y, con ellas, estabilidad política? Da la impresión de que hemos asumido que en Europa, hoy por hoy, la democracia sólo tiene lugar en el ámbito nacional. Pero no hay que olvidar que no se puede menospreciar sistemáticamente una voluntad electoral sin que acabe por tener consecuencias para el sistema político en su conjunto.

8. AMPLIACIÓN Y EURO

Aunque no se difunde públicamente, ni menos se reconoce, hay una clara vinculación entre los plazos establecidos para llegar a la moneda única, por un lado, y el proceso de ampliación de la UE a los países de la Europa central y oriental, por otro. En este sentido, la Comisión Europea anunció el pasado mes de julio que la adhesión de Chequia, Eslovenia, Estonia, Hungría y Polonia, así como de Chipre, estará lista para el año 2002 ó 2003, coincidiendo, curiosamente, con la fecha en que entrará en circulación el euro.

En efecto, tras la inesperada —especialmente para los alemanes— reunificación de Alemania o, mejor, integración de los *Länder* orientales en la RFA, y el derrumbe de los sistemas comunistas en la Europa central y oriental en 1989, el gobierno de Bonn se fijó la aproximación al Este como objetivo prioritario, a medio plazo, de su política exterior, compro-

metiéndose para ello a facilitar la integración de esas nuevas democracias en las estructuras de la UE, tal como el mismo Karl Lamers ha destacado recientemente en la entrevista más arriba mencionada. A pesar de lo que pudiera parecer, no se trata de un gesto filantrópico de la República Federal hacia esos Estados. Baste para ello repasar los últimos trece siglos de su historia: desde el punto de vista de la historiografía alemana y de buena parte de su clase política, forman parte consustancial de esa *Mitteleuropa* que constituye su *hinterland* natural. Se trataría, en consecuencia, de crear un nuevo bloque de influencia en Europa que gire en la órbita de Alemania.

Por voluntad de la RFA, de su calendario internacional, esta adhesión se ha transmutado, por tanto, en agenda comunitaria imparable. No obstante, el proceso de unidad económica de los Quince estaba entonces, y aún ahora, en trance de consolidar el mercado único. Para tratar de superar el obstáculo que supone la no conclusión de esta etapa fundamental en el proceso de construcción europea se acordó acelerarlo e impulsarlo, en parte a sugerencia del presidente francés, François Mitterrand, mediante la creación de una moneda única, aspecto que se incluye en el Tratado de reforma de la Comunidad. Las razones que se adujeron para esta aceleración fueron las de operatividad y eficacia ante el horizonte de una Unión formada no ya por quince Estados, sino por 18, 21 o incluso 27. En realidad, al ligar moneda única y ampliación, se buscó establecer un objetivo-señuelo que atrajera irresistiblemente a los Estados miembros hacia un ideal fijado de antemano, aunque teóricamente muy difícil de conseguir, obteniendo al tiempo otro objetivo no tan unánimemente deseado.

El ingreso de estos países constituye una operación extremadamente complicada que, entre otros detalles, exige una reforma institucional profunda. No obstante, como se vio con claridad meridiana en la «cumbre» del Consejo Europeo en Amsterdam, cualquier tipo de alteración convencional para facilitararlo —el voto ponderado de los Estados, la filosofía que inspira los fondos estructurales y de cohesión, su reparto, la Política Agraria Común (PAC), la solidaridad intracomunitaria— supone un riesgo alto de perturbar el frágil equilibrio comunitario actual.

Vincular moneda única y ampliación compromete en demasía el ambicioso proyecto de la Europa comunitaria. Es cierto que los europeos occidentales tenemos una deuda moral e histórica con nuestros vecinos del Este. Pero esa misma constatación no debiera obsesionarnos con los plazos, forzando una reorganización para la que la UE no está preparada aún, que puede llevarnos hacia un abismo en el que caerían países miembros y candidatos cuando precisamente todos deben coincidir en el interés común de contar con una UE bien cohesionada, próspera y con futuro.

* * *

9. CONCLUSIONES

Para hacer frente a la apertura de mercados decretada por el extinto GATT y supervisada por la Organización Mundial del Comercio, la Europa comunitaria —sus productos— se está confesando, de hecho, incapacitada para competir en un mercado mundial libre de aranceles. El Estado del Bienestar lastra una producción que necesariamente debe reflejar en los precios finales esas sinecuras sociales. El euro —en tanto proyecto comúnmente concertado para reducir la inflación, el déficit, el endeudamiento público— y el Estado del Bienestar —estructura compleja generadora de gasto público— constituyen polos opuestos que, de hecho, es muy difícil combinar, a no ser que la moneda única haya sido concebida como fortaleza inexpugnable para mantener ese gasto social en el espacio geográfico concreto que ocupa la UE. Pero, en cierto sentido, esto también constituye una confesión de impotencia ante un envite del que la opinión pública de los Quince está inadvertida.

Pero, además de esa concepción del euro como una nueva Línea Maginot, esta vez levantada para hacer frente al acoso del Estado del Bienestar europeo por las hordas globalizantes, da la sensación de que en su puesta en funcionamiento se está actuando con una cierta dosis de precipitación, quizás presionada la UE por la cada vez más intensa liberalización del comercio internacional. Este apresuramiento ha podido también estar presidido tanto por el legítimo deseo de los políticos de presentarse ante sus electorados con resultados tangibles, como por la inquietud e inseguridad que en general provoca el complicado y mutante escenario internacional que se nos avecina.

Este desasosiego afecta singularmente a nuestros amigos alemanes, tal como se aprecia prácticamente a diario, y en particular al equipo democristiano-socialcristiano-liberal que dirige sus destinos y que observa con no poca desazón la situación centroeuropea. Una tribulación a la que, ciertamente, no deja de retroalimentar esa especie de mezcla histórica entre el mito y la frustración que es la *Mitteleuropa* operando como impulsor, frente a la contención que ejerce un complejo de culpa de raíces no menos históricas que ha pervivido en la mentalidad germana a lo largo de la segunda mitad del siglo.

Se podría decir incluso que con Maastricht se ha hecho tabla rasa con uno de los rasgos que más ha distinguido al proyecto comunitario: el de ir cubriendo etapas bien planificadas y poco ambiciosas con pies de plomo. Siguiendo ese proceder, la senda que conduce a la unificación europea ha gozado de un nivel de aceptación muy elevado dentro de la opinión pública continental, hasta tal punto que los que estaban fuera al abrirse los sucesivos períodos de ampliación han hecho lo imposible por entrar (con la notable excepción de Noruega): en 1972, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; en 1980, Grecia; en 1985, España y Portugal; en 1994, Austria,

Finlandia y Suecia. En la próxima etapa será el turno de algunos de los países de Europa central y oriental que, si pudieran, incluso hoy mismo ingresarían en bloque sin plantear casi condiciones; tal es el atractivo que sigue ejerciendo la UE.

Por otra parte, la unidad monetaria, en tanto en cuanto proyecto geopolítico, sin tomar en consideración ni sus fundamentos ni sus consecuencias económicas y financieras, favorece sobre todo a Alemania y también, aunque en menor grado, a Francia. En cuanto a la primera, existe el convencimiento en su clase política de que únicamente con dicho proyecto se puede, por un lado, vincular indisolublemente el país a la construcción de una Europa supranacional y, por otro, reporta el beneficio añadido de actuar de polo magnético con respecto a los países de Europa central y oriental, tradicionalmente temerosos de una potencia germánica central.

En cuanto a Francia, aunque los principales beneficios que recogería surgen del hecho macroeconómico de la unidad monetaria en sí, no hay que olvidar que, desde la unificación alemana por Bismarck a mediados del siglo pasado, ambas naciones han sostenido una larga e intensa rivalidad. Y así, mientras la actual clase política alemana conseguiría con el euro —tal es su creencia— superar comunitariamente ese espíritu incurablemente militar al que se refería el austríaco Stefan Zweig, los franceses podrían vencer esa especie de complejo de inferioridad que sienten hacia sus vecinos y olvidar su permanente temor a la invasión germánica (1870, 1915, 1940) y, en algunos casos, también ocupación (1940-1944) de la práctica totalidad del territorio o de partes importantes del mismo (Alsacia, Lorena, 1870-1918 y 1940-1944). Se compra, pues, seguridad.

Llevando las cosas al extremo, se podría incluso decir que la celeridad en ir cubriendo etapas en el sendero de la integración por la UE —y Maastricht y el euro constituyen ejemplos paradigmáticos— viene a dar respuesta, por un lado, al miedo que Alemania se tiene a sí misma y, por otro, al temor que Francia profesa a su vecino del otro lado del Rin. La construcción europea es un proceso internacional complejísimo que, sin embargo, da la impresión de que está llevándose a cabo en estos últimos años a uña de caballo amenazando claramente la capacidad de resistencia de las persistentes y respectivas estructuras nacionales —culturales, económicas, sociales—, alterando por tanto la disposición *a priori* favorable de las opiniones públicas.

En cierto sentido, pareciera como que si se estuviera siguiendo el guión de los modelos unificadores del XIX —de la unidad aduanera a la política— con la creencia historicista, incluso spengleriana, de que en nuestro tiempo el terreno está ya preparado para hacerlos reproducibles a escala continental. Quienes así piensan olvidan que la UE está conformada, a diferencia de esos ejemplos decimonónicos, por naciones en el sentido más amplio del término, un conjunto culturalmente muy heterogéneo, con historias nacionales separadas y hasta radicalmente enfrentadas, que

carece, en términos históricos, de una tradición política compartida. Es ciertamente llamativa, a este respecto, la afirmación del principal promotor de la UE, Jean Monnet, que, reflexionando sobre el alcance de su creación, explicaba que si pudiera recomenzar el proceso lo haría por la cultura y no por la economía. Retomaba con ello, en cierto sentido, la máxima de Karl Jaspers según la cual la cultura europea está fundada en tres ideas básicas: «libertad, historia y ciencia».

En este debate sobre plazos, sobre apresuramientos, la reflexión de Monnet implicaría, en sí misma, investir al proceso de una temporalidad diferente, ante el temor, tal vez, de que un exceso de velocidad haga descarrilar a la unificación europea. Para amalgamar ideas, conceptos, tradiciones culturales, es preciso olvidarse de tramos y metas. Hay que sentar unas bases y ponerse a trabajar. Y no sólo es tarea de la generación impulsora, sino de las siguientes, sin que pueda establecerse a ciencia cierta el final del proceso, algo que, evidentemente, no cabe en la mentalidad política dominante en la actualidad. El Director General de la UNESCO, Federico MAYOR ZARAGOZA, lo ha expresado con una gran nitidez:

«Hace falta tener consciencia del mañana en lugar de esta especie de obsesión por el presente, de los objetivos a corto plazo y estrictamente económicos. Nunca el dinero ha unido, no hay ningún caso en la historia en que los intereses económicos hayan conducido a la unidad. ¿Los fenicios unían? No, unían los helenos, porque tenían un ideal. El helenismo ha quedado y los intereses de los fenicios murieron con ellos. Tenemos que ser conscientes de esto: Europa sólo se movilizará por ideales. El dinero no apasiona» (*El País*, 22 de junio de 1997).

Pero con ser preocupante la impaciencia con que últimamente discurre el proceso de unificación europea, no parece ser su único punto débil. El hecho de tratar de poner en marcha la UEM en una época de crisis como la actual ha animado a algunos a presentarla como la panacea universal, con virtudes taumatúrgicas como las que supuestamente adornaban a los monarcas parisinos del Medievo. A nadie puede escapársele que al ser investida la UEM de tales capacidades y siendo obra humana como es, falible por tanto, se corre el riesgo de que, en caso de un hipotético traspasé, arrastre con ella al proyecto europeo en su conjunto.

A sensu contrario, cierta opinión interesada sostiene el aserto dogmático según el cual de no conseguirse la unión monetaria y, con ella, la política en la que se cree que desembocará, se nos avecina un panorama cercano al enfrentamiento armado, tal como ha ocurrido en el escenario europeo siempre que ha fallado la diplomacia (Clausewitz). No se tiene en cuenta, sin embargo, que, desde 1945, Europa ha experimentado una transformación socioeconómica y política que la ha vuelto irreconocible con respecto a los parámetros vigentes en su intenso pasado.

Por añadidura, y afortunadamente, los actuales quince países miembros de la UE son democracias consolidadas y no dictaduras o gobiernos autoritarios, como ocurría hasta hace no mucho tiempo, que han dado diversas y sobradas pruebas de madurez intereuropea cediendo importantes parcelas de sus soberanías respectivas —aspecto éste que ha sido siempre motivo de ultimátums prebélicos— a organismos internacionales de ámbito continental, pero paso a paso y sin violentar el camino hacia una futura realidad supranacional. En fin, que, como ha escrito Miguel HERRE-RO DE MIÑÓN, «afirmar que el euro en 1999 es una cuestión de paz o guerra es una verdadera sandez, bastante peligrosa, por cierto» (*El País*, 11-IV-1997).

La cosa no es tan dramática como algunos han querido pintarla. En palabras del Premio Nobel de Economía Paul A. SAMUELSON, un «rechazo de la divisa europea única y de un Banco Central europeo único no significaría el fin del mundo para Europa ni para la Unión Europea. El libre comercio de bienes y servicios por todo el continente ha sido y será lo que más cuenta y no presupone ni requiere un centro de poder burocrático en Bruselas ni en ninguna otra parte» (*ABC*, 23-VI-1997). Con todo, los Estados miembros no deberían dejar de observar permanentemente, y siempre que sea posible, la disciplina impuesta por el cumplimiento de los criterios de convergencia, esenciales, como prueba el caso de España, para seguir avanzando en el proceso, necesariamente largo, que nos deba conducir hacia la unificación monetaria, mantener nuestras economías en buena salud y poder competir adecuadamente en un mundo cada vez menos proteccionista, más globalizado.

Enero de 1998

DOCUMENTOS

